

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUNJA.**



SALA LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ
Aprobado Según Acta No.29

Tunja, seis (06) de agosto del dos mil veintiuno (2021).

I-. OBJETO POR DECIDIR.

El recurso de apelación interpuesto por la representante del **Ministerio Público** contra la providencia del **31 de mayo de 2021**, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores dentro del proceso en referencia.

II-. ANTECEDENTES

Carlos Alfonso Guerrero Huertas convocó a juicio al **Municipio de Campohermoso – Boyacá**, con el propósito que declare conforme al principio de la realidad sobre las formas, una relación laboral vigente del 11 de abril de 2016 al 2 de octubre de 2017. (*Archivo 06*)

A través de providencia fechada 28 de enero de 2021 el a-quo ordenó notificar el presente asunto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales de la ciudad de Tunja, a quien concedió el término de 10 días conforme al artículo 74 del CPT, para pronunciarse frente al asunto. (*Archivo 14*)

El **MINISTERIO PÚBLICO** al respecto, y en el capítulo de pruebas, para lo que interesa a este asunto solicitó: (Archivo 16)

“3.1.1. En los términos del artículo 195 del CGP, aplicable por integración normativa al procedimiento laboral (Art. 145 CPL) para que se complemente el informe solicitado en la demanda y el señor Pedro Miguel López Vela, en condición de alcalde del Municipio de Campohermoso para la época de los hechos, indique las razones por las cuales se contrató de manera continuada a través de prestación de servicios con el demandante, si se realizó durante su mandato el rediseño institucional en lo que tiene que ver con la planta de trabajadores oficiales para la operación de la denominada maquinaria amarilla, si se realizó análisis de costo – beneficio de contratar por medio de prestación de servicios a un operador de retroexcavadora, frente a la vinculación que pudo efectuarme mediante contrato de trabajo como trabajador oficial.

3.1.2. Recepcionar prueba testimonial de los Secretarios de obras y servicios públicos, del Municipio de Campohermoso para la época de los hechos, señores Juan Pablo Matamoras y Joselín Cuervo Hernández, quienes depondrán, entre otros aspectos, acerca de los hechos de la demanda, la continua contratación del municipio y el señor Carlos Alfonso Guerrero Huertas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron cada uno de los contratos de prestación de servicios, la situación y condiciones laborales del demandante.”

III-. PROVIDENCIA RECURRIDA

El proveído del **31 de mayo del 2021**, por medio del cual el *a quo* frente a las pruebas del Ministerio Público señaló: (“1:01:43)

“Primero: Declaración juramentada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Código General del Proceso, se ordena que bajo la gravedad del juramento, el señor Pedro Miguel López Vela, quien fungiera como alcalde municipal de Campo hermoso Boyacá para la época de los hechos, rinda informe escrito sobre los interrogantes planteados por la representante del Ministerio público al momento de pedir la prueba, para el efecto de la señora Procuradora dentro del término de 10 días siguientes a la presente audiencia, deberá indicar la dirección electrónica o lugar de notificación del citado burgomaestre, con el objeto de que esté dentro de 15 días siguientes, brinde el informe del caso so pena de imponerle las sanciones correspondientes. Igualmente, se advierte a la señora Procuradora que, de no cumplirse con la anterior carga procesal, pues se entenderá desistida la prueba.

Testimonial: Frente a la prueba testimonial solicitada por la Procuraduría, en la que solicita: “recepcionar prueba testimonial de los Secretarios de obras y servicios públicos del municipio de Campo hermoso para la época de los hechos,

*señores Juan Pablo Matamoros y Joselyn Cuervo Hernández, quienes depondrán entre otros aspectos acerca de los hechos de la demanda, la continua contratación del municipio y el señor Carlos Alfonso Guerrero Huertas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron cada uno de los contratos de prestación de servicios, la situación y condiciones laborales del demandante. Para su debida citación, se solicita al despacho judicial, se requiera a la alcaldía municipal de campo hermoso a fin de que allegue los datos de dirección que obren en sus respectivas hojas de vida y/o para que a través del apoderado de dicho municipio se surtan las citaciones correspondientes”. Al efecto este estrado judicial luego de examinar la citada solicitud probatoria, debe indicar que la misma no cumple con todas las exigencias que establece el artículo 212 del Código General del Proceso y como quiera que el legislador no ha establecido excepciones para el no cumplimiento de los requisitos en las normas, precisamente por ser éstas de orden público, entonces no es posible crear la desigualdad en favor de la Procuraduría quien no mostró actividad alguna tendiente a conseguir los datos correspondientes de las personas de quienes desean que les sea recibida su declaración, habiendo ellos podido obtenerlo de forma directa del ente de control o por medio del derecho de petición, lo que en criterio de este despacho busca es crear un procedimiento diferente para la solicitud probatoria que realiza el ente de control. **Por esta razón, este juzgado se abstiene de decretar la prueba testimonial pretendida por la Procuraduría.**”*

IV-. RECURSO INTERPUESTO. (“1:07:22)

El Ministerio Público, alude que el artículo 46 del CGP faculta al Ministerio Público para intervenir en los procesos judiciales como sujeto procesal especial, en donde cuenta con amplias facultades, entre otras, la de solicitar pruebas.

Tales facultades han sido respaldadas vía jurisprudencial por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisiones como la STL-5273 de 2021, en donde se trajo a colación la sentencia SL2501 de 2018, reiterada en la SL del 7 de octubre del 2018 radicado 32641, reiterada en la sentencia SL del 23 de septiembre del 2019 Radicado 36132, y la SL del 19 de noviembre del 2014 radicado 33853. Allí, además, se indicó que, en virtud de los bienes jurídicos protegidos con la intervención de este ente de control, su actuación se encuentra enmarcada en las diferentes etapas del proceso,

pero no está limitada, por lo que no se le pueden exigir las mismas condiciones que a los demás sujetos procesales.

Indicó que, en el caso concreto no fue posible acudir a la entidad vía derecho de petición, pues en la actualidad el término para resolver los mismos es de 30 días, y una vez notificada de la presente demanda contaba con tan solo 10 días para intervenir. Por tanto, solicita que sea la alcaldía, en donde reposan las hojas de vida de los ex funcionarios citados, la que suministre dicha información.

También, manifestó su desacuerdo con la obligación impuesta de presentar un cuestionario para que sea absuelto por Pedro Miguel López ex alcalde de Campohermoso, ya que al solicitar la prueba se indicaron los puntos sobre los cuales se debe indagar al mismo, situación que de igual forma se realizó frente a la prueba testimonial.

En consecuencia, señala que, la petición de pruebas se ajustó a la normatividad aplicable en su condición de sujeto especial, sin que se le pueda exigir aportar unos datos que son ajenos a la Procuraduría, encontrándose en mejor condición de allegarlos el ente municipal.

Por ello requiere se revoque la decisión, y se decrete la prueba en la forma que fue solicitada.

V-. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

Guardaron silencio.

VI.-RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN.

a-. Marco de la Decisión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del CPT y SS, numeral 4º, el auto que **niegue el decreto o la práctica de una prueba** es susceptible de apelación y, en consecuencia, la sala decidirá conforme lo expuesto por el apelante.

b-. Consideraciones.

En el asunto bajo estudio, encuentra la sala que el Ministerio Público solicitó las siguientes pruebas:

- De conformidad con el artículo 195 del CGP, y acorde a lo solicitado en la demanda, que **Pedro Miguel López Vela** rinda informe en condición de alcalde del Municipio de Campohermoso para la época de los hechos
- Testimonio de los secretarios de obras y servicios públicos, del Municipio de Campohermoso para la época de los hechos, Juan Pablo Matamoros y Joselín Cuervo Hernández.

Al solicitar la prueba, el ente de control planteó los interrogantes que deben ser absueltos por los convocados, e indicó: *“para su debida citación se solicita al despacho judicial, se requiera a la Alcaldía Municipal de Campohermoso, a fin de que allegue los datos de dirección que obren en sus respectivas hojas de vida, y/o para que a través del apoderado de dicho municipio se surtan las citaciones correspondientes.”*

Al resolver, el a-quo **negó** la segunda prueba señalada al indicar que la petición no cumplía con los requisitos del artículo 212 del CGP; a la primera

de ellas **accedió** limitándola a que se allegue la dirección para notificaciones del convocado, y el pliego de preguntas respectivo.

De antemano, debe señalar esta corporación que, frente a los argumentos expuestos al recurrir por la Procuradora Judicial, en cuanto a la primera de las pruebas citadas, no se realizará pronunciamiento alguno. Lo anterior, pues dicha prueba fue **efectivamente decretada** por el a-quo, decisión que, por ello, la convierte en inapelable, a la luz de lo normado por el numeral 4 del artículo 65 del CPT; se recuerda, solo procede tal recurso contra el auto que **niegue el decreto o la práctica de una prueba.**

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la segunda prueba nombrada, a saber, los testimonios de los *secretarios de obras y servicios públicos, del Municipio de Campohermoso para la época de los hechos, Juan Pablo Matamoros y Joselín Cuervo Hernández*, debe señalarse que, aunque el Ministerio Público no tenga la calidad de parte, sí cuenta con la facultad de actuar en el proceso dentro de los parámetros que gobiernan el proceso laboral. Así lo indicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL2501-2018, que citó la sentencia de 7 de octubre de 2008, radicado 32641, reiterada en las de 23 de septiembre de 2009, radicado 36132, y 19 de noviembre de 2014, radicado 33853:

“Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto 262 de 2000).

Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes,

por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 (ibídem), en su inciso final, “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral. (Subraya la Sala).

En estas condiciones, no son de recibo los argumentos del censor, al pretender que se limite exclusivamente la intervención del Ministerio Público a “evitar que se haga (sic) fraudes y se pretende obtener un derecho indebido en el proceso”, como se indica en el recurso, o “únicamente como vigilante de los procesos”, según la transcripción del salvamento de voto, pues la Constitución Política y la Ley, al desarrollar sus funciones, las garantizan en forma amplia y sin restricción.

De otro lado, no surge que el Tribunal hubiera interpretado erróneamente el Art. 10 Ley 25 de 1974, pues sólo se limitó a transcribir el texto del artículo, resaltando en negrillas que “Corresponde a los procuradores regionales actuar ante los juzgados laborales”, sin haberle dado alguna valoración diferente a la que corresponde a su tenor literal. Idéntico comentario debe hacerse con relación a los artículos 16 del C. de P. L. y S. S. y 48 del Decreto 262 de 2000.

Tampoco el ad quem pudo interpretar erróneamente los artículos 121, 122 numeral 1 y 272 de la Constitución Nacional, artículos 44 y 97 del C. de P. C. y 32, 77 y 145 del C. de P. L. y S. S., por cuanto el fallo no aludió a tales disposiciones, y mal podía referirse al artículo 272 de la C. P., dado que éste se refiere es al Control Fiscal.

Igualmente, en la sentencia objeto de análisis, no se concluye que el Ministerio Público sea parte en el proceso, como se indica en el recurso, lo que se expresó es que “cuando trata de proteger a este bien jurídico en particular, los procuradores delegados pueden intervenir en los procesos laborales”, es decir que su intervención, no es como parte, sino como Ministerio Público, disquisición que en momento alguno resulta descartada”.

Luego, es evidente la obligación del Ministerio Público, aunque no tenga la calidad de parte, de ajustar sus intervenciones al procedimiento laboral, deber con el que se cumplió en el presente asunto, pues la prueba en debate se

solicitó en el momento procesal oportuno. No obstante, y dada su calidad, se reitera, sujeto especial y no parte, considera la sala que no es dable imponerle la carga procesal de suministrar las direcciones de los testigos citados, quienes, además, fungieron como secretarios de obras públicas del Municipio; y, por ello, en virtud de la carga dinámica de la prueba corresponde al Municipio de Campohermoso suministrar tal información, al encontrarse en mejor condición de aportarla, pues se trata de funcionarios del ente municipal.

Así las cosas, el requisito que echa de menos la juez de instancia se suple con la petición que hiciera el ente de control: *“para su debida citación se solicita al despacho judicial, se requiera a la Alcaldía Municipal de Campohermoso, a fin de que allegue los datos de dirección que obren en sus respectivas hojas de vida, y/o para que a través del apoderado de dicho municipio se surtan las citaciones correspondientes.”*, sin que, por ello, traslade la labor investigativa al despacho judicial.

De igual forma, al solicitar la prueba se indicó en forma clara el objeto de la misma, allí se señaló: *“quienes depondrán, entre otros aspectos, acerca de los hechos de la demanda, la continua contratación del municipio y el señor Carlos Alfonso Guerrero Huertas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron cada uno de los contratos de prestación de servicios, la situación y condiciones laborales del demandante.”*.

Luego, se tienen cumplidos los requisitos legales (Art.212 CGP) para decretar la prueba testimonial referida. Además, de tratarse de una prueba pertinente, conducente y necesaria, lo que conlleva a revocar la decisión impugnada.

Sin Costas por no existir controversia en esta instancia.

VII.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO: **REVOCAR** el proveído impugnado en cuanto a la prueba testimonial. En su lugar, decretar la prueba testimonial solicitada por la Procuradora 11 Judicial Laboral, en los términos señalados en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: **Sin Costas** en esta instancia.

TERCERO. Ejecutoriada la presente decisión, por secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen, dejando las constancias necesarias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados

JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ

FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ

MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ

Firmado Por:

Julio Enrique Mogollon Gonzalez
Magistrado
Sala 002 Laboral
Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Maria Isbelia Fonseca Gonzalez
Magistrada
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Fanny Elizabeth Robles Martinez
Magistrada
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:
a818164e279aa01b33c030f44ca836bf0c77de18bb21187660d3414dad5c23a9
Documento generado en 06/08/2021 02:03:50 PM